

no siga surtiendo efectos, no envuelve un efecto retroactivo.

Que obrando como obró dentro de la órbita de sus facultades el Gobierno del Estado de Hidalgo, al reprobar la eleccion á que Martinez debió ser elegido Diputado en ejercicio, tampoco importa un ataque á la garantía á que se refiere el parrafo 2º del artículo 35 de la misma Constitucion general, por que las elecciones, empleos y comisiones á que se refiere, son de diversa naturaleza de la eleccion, que en la Junta de mineros verificada en Zimapan el 23 de Febrero de este año, recayó en la persona del quejoso.

Considerando, por último: que él no ha tenido motivo alguno digno de ser atendido para interponer este amparo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitucion general, y en el 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

Primero: que se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 13 del mes próximo pasado por el Juez de Distrito de Hidalgo, en la parte que declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Mariano Martinez, contra la Orden de que se ha hecho mérito.

Segundo: que se condena al quejoso al pago de una multa de cien pesos.

Tercero: que se devuelvan sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; sacándose además copia igual para su publicacion en los periódicos.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto de los puntos 1º y 3º, y por mayoría respecto del 2º, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simon Gusman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, 11 de Setiembre de 1874.—*Luis María Aguilar, secretario.*

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Zacatecas, contra D. Sotero de la Torre, por peculado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice:

Que á fin de cumplir el superior auto de 12 de Abril del presente año, del Tribunal de Circuito de Guadalajara, que dispuso se perfeccionara la averiguacion criminal, sobre otro de los demas motivos porque en la presente causa se ha procedido contra D. Sotero de la Torre, sin formularle el cargo correspondiente, por la entrega que hizo de \$18,753 20 es. á las fuerzas pronunciadas en esta Capital en Enero de 1870, ni ocupándose por tanto el defensor del reo de tratar el motivo expresado, ni el Juzgado de resolverlo; y habiéndose presentado voluntariamente D. Sotero de la Torre, en 14 de Agosto último, previa la notificacion del superior auto de 12 de Abril, puesto en prision en el hospital civil, se le ampleó su declaracion sobre el motivo y con que autorizacion continuó despues del pronunciamiento de 8 de Enero de 1870, con la oficina del papel sellado abierta, sin haber asegurado las existencias en efectos y caudales, y permanecido en esta Capital ocupada por García de la Cadena y sus fuerzas, continuó en el empleo, no pareciendo la fuerza fisica que lo hicieran, mas que el amago de la destitucion; por cuya causa, entregó al interventor nombrado por García de la Cadena, \$17,753 20 es. y sin ninguna razon, mil pesos á D. Rafael Fernuza, que se titulaba Gobernador interino del Estado, segun consta de los documentos de fojas 10, 11 y 12, y de la comunicacion inserta en el testi-

monio de la protesta de fojas 8, siendo que no debí acceder mas que á la fuerza física en el momento del pronunciamiento, y no haber dado lugar con su presencia á la exacción de los pronuncios, con lo que, y previo el examen de tres empleados federales, de los estados como testigos por de la Torre, sobre que, en una conferencia con ellos el día 8 de Enero citado, convenida solamente á no tomar parte en el pronunciamiento, se convino con los CC. Ensayador é Interventor de la casa de moneda, en permanecer al frente de las oficinas federales, para cuidar de los intereses á su cargo, y salvarlas en cuanto les fuese posible, formulando las protestas oportunas contra toda ocupación violenta, todo lo cual pusieron en práctica; se le hizo cargo de haber entregado á los sublevados después de los acontecimientos del 8 de Enero de 1870, la cantidad de \$18,758 20 cs. cuyo cargo se funda en los documentos que obran en la causa y en su propia confesión, del que escapándose con razones inadmisibles, reconvenido que satisfacía al cargo, terminó alegando que como la oficina del papel sellado, fué intervenida por orden de la Dirección de hacienda el mismo día del pronunciamiento, no le fué posible sustraer cantidad alguna de la existencia que había en sellos y numerario, ni de las sumas parciales que continuaron ingresando durante la permanencia de los pronuncios en esta Ciudad, y limitándose solo á llevar cuenta exacta y á recoger recibo de ellas, como, cuando aquellos evacuaron la plaza, algunos fondos con que auxilió al C. General Nor, y el resto lo entregó á la Jefatura de Hacienda, en la inteligencia de que tal conducta llenaba los deberes de empleado federal, supuesto que por otra parte, no se le había comunicado disposición alguna á que arreglase su conducta en casos como el que se trata y carecía de toda regla á que atenerse, conviniéndose por eso con los CC. Interventor y Ensayador de cajas de la casa de moneda, en cuidar de los intereses

TOMO VI.—PÁGE II.

federales en la forma expresada.

Esto supuesto, el suscrito, después de un detenido examen del cargo y respuestas del acusado; de las pruebas aducidas y de las razones alegadas por el C. defensor, para pedir el sobreseimiento ó absolución, ha encontrado en su opinión, que nada tiene que ver con el particular la ley de amnistía de 27 de Julio del presente año, que se refiere solo á la responsabilidad del delito político, dejando á salvo la responsabilidad civil, como expresamente lo disponen también los arts 256, 257, 282 y 365 del Código penal de 7 de Diciembre de 1871; y efectivamente, examinando dicha ley, que concierne en el art. 1º amnistía *para los delitos políticos* cometidos hasta su fecha, sin excepción de persona alguna, mandándole en el 2º sean puestos desde luego en libertad todos los que por dichos delitos estén sujetos á cualesquiera pena ó sometidos á juicio, sobreseyéndose en sus procesos con la aclaración del 3º, sobre que tal amnistía deja á salvo los derechos de tercero, y que según el 4º, los amnistiados, aunque vuelvan al pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no los tienen á la devolución de cargos, empleos ó grados, ni al pago de sueldos, pensiones, montepíos ó créditos contra el erario, *de que estén privados actualmente con arreglo á las leyes*; se vé que el acusado no está incluido en la amnistía, porque aunque si se hubiera procedido en su contra por haber sido Interventor de la casa de moneda, nombrado por D. Donato Guerra á principios del mes de Febrero del presente año, excecionando á la fuerza en virtud de las órdenes de aquel cabecilla, la suma de \$3,102 50 cs. perteneciente al erario federal por el uno por ciento de amonedación, se hubiera sobreseído en tal causa, como en las demás, por varios delitos sobre la responsabilidad criminal, del suyo político de complicidad con los rebeldes, y la responsabilidad civil dejado pendiente, según los artículos citados 3º y 4º de la amnistía, mientras se resuelve definitivamente por el

64

superior, sobre los cargos de peculado y prevaricato, falta de vigilancia, omisión y descuido de los intereses de la renta del papel sellado, descubiertos en la administración principal que manejaba, así como en las subalternas, á cuyos encargados no les exigió las fianzas respectivas, sin otorgarla el mismo, no obstante las continuadas órdenes de la Administración general y del Ministerio de Hacienda de fojas 1, 2, 4, 5, 6, 15 y 16 de las diligencias anexas á la causa principal, que se le mandó dar relativas á la fianza de \$ 8,000 según la orden de la foja 13, por razón de su cargo de Administrador principal de la Administración principal de este Estado; y disponiendo finalmente del exceso en cobre por falta de moneda decimal, en la venta de papel de cinco y diez centavos.

Ahora pues, se le han hecho cargos al acusado de responsabilidad criminal y civil por los delitos anteriores y en cumplimiento del superior auto de 12 de Abril del corriente año, el de haber entregado á los sublevados después de los acontecimientos de 8 de Enero de 1870, la cantidad de \$ 18,753 20 cs, fundándose en las constancias de la causa, fojas 8, 14, 16 y 17; de las diligencias precautarias sobre el aseguramiento de los bienes del acusado por su mal manejo, que resultaba hasta entonces; en los documentos de fojas 1, 6, 7, 8, 9 y 10, del oficio de fojas 32 á 45 de las mismas diligencias; de las fojas 8, 10 á 12 (cuaderno 49); de las diligencias relativas á la ocupación de las existencias de la administración principal del papel sellado, á cargo de D. Sotero de la Torre, después del 8 de Enero de 1870, y de fojas 32 á 41 de la causa, (cuaderno 29) contra D. Pablo de la Rosa y D. Sotero de la Torre, por peculado, y en su propia confesión: en consecuencia dicho delito, opina el suscrito, es el á que se contrae el art. 19 cap. 29 de la ley 24 de Marzo de 1873, para hacer efectiva la responsabilidad de los empleados públicos, que como tales y á sabiendas abusen de su ofi-

cio, para perjudicar á la causa pública, del que el Promotor juzga reo y de complicidad en la rebelión á D. Sotero de la Torre, por los hechos de que se le ha hecho cargo, en cumplimiento del superior auto que motivó estas diligencias, hasta ponerlas en estado de sentencia, sin que se viole la amnistía, porque como ha asertado, dicha gracia solo extingue la acción penal con todos sus efectos, aprovechando á todos los responsables, y estando presos, se ponen inmediatamente en libertad; pero no la responsabilidad civil, ni las acciones para exigirla, ni los legítimos derechos de tercero que la ley de 27 de Julio próximo pasado dejó á salvo en su art. 89, sin que haya declarado que el peculado ó el prevaricato de los empleados públicos que abusan de su oficio para perjudicar á los intereses del erario, se dejan expresamente á cargo del mismo.

Todo este supuesto, y hallándose la entrega de que se hizo cargo á D. Sotero de la Torre, previamente probada por su propia declaración, por la toma de razón de fojas 136 vuelta, documentos de fojas 8, 10, 11 y 12 (cuaderno 49) reconocidos los dos, el primero, en debata forma por D. Antonio Lozano y D. Juan M. Cantabrana, y el último, en contradicción con el reo; que en la pregunta relativa de fojas 316 frente y vuelta, sabe explicar el origen que tuvo la cantidad de mil pesos que expresa el documento de la foja 12, si fué de los productos de la renta en la venta de efectos en esta Capital, ó de productos de las subalternas, excepcionándose con que, como todo el producto forma un solo fondo, no recordaba si tales mil pesos fueron productos de la Capital ó de las subalternas, y que extendió el recibo D. Rafael G. Herniza, Gobernador interino del Estado, pero no hallarse en aquellos momentos el interventor; que ni la fuerza que le hicieron los sublevados para que continuara en su empleo explica, no apareciendo en la protesta respectiva que hizo el 12 de Enero, sino el amago de la destitución, para á cuya causa solo entregó

\$17,753 20 es. al interventor nombrado, y ninguna razon de los mil pesos que dió á Ferniza el mismo dia 27 de Enero; que este cabecilla se retiraba precipitadamente de esta Ciudad, por haber tenido noticia de la aproximacion de las tropas del General Neri, siendo que no debió ceder mas que á la fuerza física en el momento del pronunciamiento, sin haber dado lugar con su presencia á la exaccion de los sublevados, que aparece hecha en los dias 23, 26 y 27 de Enero, que motivó la salida de Ferniza, todo lo que hace responsable civilmente de prevaricato á D. Sotero de la Torre, supuestas las leyes de amnistía de 14 de Octubre de 1870 y 27 de Julio del presente año, que cubren la responsabilidad criminal de los empleados públicos que como el presente, aparecen cómplices en la sedicion de 8 de Enero de 1870 y en la rebellion contra los poderes legalmente constituidos; delito que en el primer caso, no se justificó en la forma prevenida por la ley de procedimientos, sobreseyéndose en el iniciado por la responsabilidad del delito político; y en el segundo, por no haber podido ser habido sino hasta el 14 de Agosto, en que estaba ya publicada la amnistía de 27 de Julio del presente año, cumpliendo solo en lo prevenido por el superior auto de 12 del último Abril, relativo á la responsabilidad civil de D. Sotero de la Torre, por su complicidad con los rebeldes, amnistados sin escepcion por la expresada ley, sin perjuicio de la responsabilidad que contrajo por la intervencion en nombre de los rebeldes, como interventor de la casa de moneda de esta Ciudad.

Contrayéndose pues al cargo que se le hizo por la entrega á los sublevados del 8 de Enero de 1870, de los fondos de la renta del papel sellado, en cantidad de \$18,753 20 es., sin que esa entrega esté justificada, ni que conste se exigiera por la fuerza, que como se dice en el derecho romano y patrio, es "*cosa que es hecha á otro tortivamente de que no se puede amparar el que los recibe*"; concluye el Promotor pidiendo

á V. O. Juez, se sirva fallar el cargo expresado hecho á D. Sotero de la Torre, declarando, que envolviendo dicho cargo como se ha demostrado, el delito de prevaricato, por haber el reo perjudicado al erario federal con aquella entrega, á sabiendas, y por complicidad con los rebeldes, se resuelva esta causa definitivamente, de conformidad con el art. 1º cap. 2º de la ley otra vez citada de 24 de Marzo de 1873 y arts. 155 y 156 del Código penal vigente, á la pena de destitucion é inhabilitacion temporal, por el tiempo que V. tenga á bien designar, y á los rezuicimientos de los perjuicios que causó á la renta del papel sellado.

Así lo estima de justicia; no obstante que V. O. Juez, resolverá lo que estime mas arreglado á derecho.

Zacatecas, 1º de Octubre de 1872.—*Jesús M. Licona.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Zacatecas, Octubre 10 de 1872.—Visto el superior auto de 12 de Abril del año corriente; las diligencias que se practicaron para su cumplimiento; el cargo que se hizo á D. Sotero de la Torre de haber entregado á los pronunciados, despues del 8 de Enero de 1870, la cantidad de diez y ocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos veinte centavos, de la renta del papel sellado; lo alegado por el defensor del acusado; lo pedido por el O. Promotor fiscal, y la citacion para sentencia.

Considerando: que la causa formada á D. Sotero de la Torre por peculado y responsabilidad, no está comprendida en la ley de amnistía, fecha 27 de Julio próximo pasado, por no ser los delitos referidos, políticos, y que aun en el caso de que tuvieran ese carácter, sentenciada la causa por este Juzgado en 24 de Agosto del año anterior, solo al Superior Tribunal de Circuito corresponde resolver acerca del sobreseimiento

y embargo de los bienes, hecho por el deficiente en dinero y efectos, que le resultó á D. Sotero de la Torre en la Administración de la renta del papel sellado, independiente de la suma de diez y ocho mil setecientos cincuenta y tres pesos veinte centavos entregados á los pronunciados, lo que forma el nuevo cargo.

Considerando: que éste se encuentra plenamente probado por la confesión del acusado en su ampliación, y que aunque aparece relacionado con el delito político del pronunciamiento de 8 de Enero de 1870, es en sí diverso, y solo se ha considerado en esta causa la responsabilidad del empleado que ha administrado los fondos públicos, y no la conducta del que lo ha traicionado al Gobierno.

Considerando: que de la ampliación del acusado, aparece: que la protesta de 12 de Enero de 1870 que consta en el cuaderno 49 fojas 8 y 9, se hizo por D. Sotero de la Torre después de habérsele nombrado interventor por el Gobierno de los pronunciados, sin haber usado este recurso desde el momento en que se dispuso la intervención, lo que demuestra que dicho documento solo se extendió para preparar la defensa ante el Gobierno legítimo, para conservar el empleo, demostrando que las exacciones fueron violentas, y no hubo voluntad para entregar los fondos de la renta.

Considerando: que D. Sotero de la Torre no practicó ni hizo diligencia alguna para salvar los fondos que administraba, y que está suficientemente probado, aun con sus hechos posteriores, su inteligencia con los pronunciados y su participio en las revoluciones de 1870 y en la actual, no habiéndose procedido por estos delitos, por las leyes de amnistía; pero sin que esto quite al empleado la responsabilidad civil y criminal que le resulta por la responsabilidad y prevaricato que hubiera cometido, cuyo delito tampoco puede considerarse comprendido en la ley de 27 de Julio citada.

Considerando: que la inteligencia de D.

Sotero de la Torre, siendo administrador de la renta del papel sellado, y la entrega de los fondos que ministraba, fué realmente voluntaria, no pudiendo explicar la pérdida de mil pesos entregada á D. Rafael G. Ferriza para el pago de las fuerzas del Sur del Estado, (documento de fojas 12 cuaderno 49) y que sus hechos constituyen un verdadero prevaricato.

Acordando á lo pedido por el C. Promotor fiscal y á lo que establecen los artículos 19 y 29 cap. 2º de la ley de 24 de Marzo de 1812 declarando definitivamente esta causa por el nuevo cargo, el Juzgado declara:

1º: Que se condena á D. Sotero de la Torre por el cargo que se le ha hecho, á la inhabilitación para obtener oficio ni cargo alguno, no privándosele del empleo, por haber sido destituido.

2º: Póngase en libertad bajo de seguras fianzas á D. Sotero de la Torre, cancelándose la que con anterioridad se había otorgado á su favor, remitiéndose en revisión la causa al Superior.

3º: Prevégase al expresado Torre, nombre persona que lo defienda en la segunda instancia, y sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial.

Hágase saber. El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fe. Firmado.—*Manuel G. Solana*.—*Luis G. Chavez*.

Es copia que certifico. Zacatecas, Octubre 11 de 1872.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

Sr. Magistrado

El Promotor fiscal dice: por auto de 12 de Abril de 1872 dispuso ese S. Tribunal que volviese la causa formada contra D. Sotero de la Torre, por los delitos de peculado

y responsabilidad, por omisión en el cumplimiento de sus deberes como empleado en la Administración principal del papel sellado en Zacatecas, al Juez de Distrito de esa Ciudad para que perfeccionase el sumario, haciendo cargo al procesado por los diez y ocho mil setecientos cincuenta y tres pesos veinte centavos, que entregó de las rentas puestas bajo su custodia y sin volver a la fuerza física, á los sublevados contra el Gobierno en 8 Enero de 1870, y para que oyendo las defensas del Sr. de la Torre sobre el particular, resolviese en definitiva. Así se ejecutó ya, como se ve por las diligencias practicadas en el cuaderno principal de este proceso, desde la foja 205 hasta la 372; y habiendo sido nombrado de oficio para esta 2ª instancia el Sr. Jue. D. Gregorio Alegria Baez, ha cumplido con su deber, presentando el largo alegato que se registra desde la foja 21 hasta la 16 del tomo respectivo ó cuaderno 39.

En vista de las constancias referidas, cree el que suscribe, que es indudable la responsabilidad del Sr. de la Torre por el nuevo cargo; porque está evidentemente justificado por la propia confesion del reo y las varias constancias del cuaderno 1º; porque no aparece que haya puesto en juego ningunos medios para escapar de los sublevados los diez y ocho mil y pico de pesos que le entregó, contentándose con formular una protesta, ostérá ó ineficaz, tanto para cubrir los fondos, como su particular responsabilidad, que parece fué la única y no aquellos, la que se propuso poner á cubierto; una protesta formulada hasta el 12 de Enero de 1870, cuando el pronunciamiento fué desde el 8, y D. Sotero alega, que en el acto fué intervenido; una protesta por la que consta que no cedió el protestante á la fuerza física, sino al temor moral de ser destituido de su empleo por los sublevados, á quienes siguió sirviendo de buena voluntad, y con quienes simpatizaba, segun se puso en claro por su conducta posterior; y una protesta en fin, que si fué tardía para la intervencion

en la oficina, fué tambien demasiado anticipada para cubrir las entregas ejecutadas en los dias 23, 26 y 27 del mismo Enero de 1870, en cuyo día 12 se formuló.

La ley de 27 de Julio último sobre amnistía para el delito de rebellion, es ineficaz en favor del Sr. de la Torre, á quien no se hace cargo por ese delito, sino por los de peculado, prevaricato y omisión en el cumplimiento de sus deberes, como empleado en las rentas federales, y justamente porque la misma ley citada deja á salvo los derechos de tercero, que aquí lo es la renta del papel sellado, exigiendo el castigo y responsabilidad civil de su Administrador principal en Zacatecas.

El Promotor fiscal de 1ª instancia, pide que se condenase al procesado por el nuevo cargo, y con fundamento del artículo 19 capítulo 2º de la ley de 24 de Mayo de 1873 y artículos 165 y 166 del Código penal, á la pena de destitucion é inhabilitacion por el tiempo que el Juez tuviera á bien designar y al rezarcimiento de los perjuicios que causó á la renta del papel sellado; pero dicho Juez, en su sentencia, nada dijo sobre el pago ó rezarcimiento de perjuicios y se limitó á condenar al procesado á la inhabilitacion para obtener oficio ni cargo alguno, disponiendo se posiera en libertad bajo de fianza, como se ejecutó.

El que firma cree por lo expuesto, que la resolucion de 1ª instancia fué omisa en sus determinaciones, y por lo mismo, dando por reproducidos los pedimentos fiscales de dicha instancia, y el formulado ante este Tribunal por los cargos anteriores, limitándose al nuevo cargo sobre entrega á los sublevados de diez y ocho mil y pico de pesos, concluye pidiendo.

Que se condene á D. Sotero de la Torre á la inhabilitacion perpetua para obtener cargos ó empleos públicos, á pagar á la renta del papel sellado los diez y ocho mil setecientos cincuenta y tres pesos veinte centavos que indebidamente entregó á los sublevados, y en caso de no satisfacer en el acto

de la notificación, la cantidad expresada ni poderla cubrir con sus bienes, por tenerlos embargados, por motivo de los cargos y descubiertos anteriores, se le imponga la correspondiente prisión, computando el tiempo de ella, según el deficiente y las reglas establecidas por el Código penal vigente.

Guadalajara, 14 de Enero de 1874.—
A. Camarena.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Guadalajara, Enero 31 de 1873.—Vis-
tos: Don Sotero de la Torre, viudo, de mas
de cincuenta y ocho años de edad, comer-
ciante y vecino de Zacatecas, fué removido
gubernativamente del cargo de Administra-
dor principal de la renta de papel sellado en
aquel Estado, por sospecharse que hubiese
tomado participio en la rebelion armada que
acontecio en dicha Capital el 8 de Enero
de 1870; y ha sido procesado por el Juz-
gado de Distrito del mismo Zacatecas, por
los delitos y faltas siguientes:

1º: Por haberdado á los sublevados diez
y ocho mil setecientos cincuenta y tres pe-
sos veinte centavos, entregándolos sin apor-
mo ó violencia material de ningún género.

2º: Por haber salido descuberto en seis
mil trescientos setenta y un pesos en se-
llos que le faltaron cuando entregó los inte-
reses públicos que estaban á su cargo.

3º: Por el descuberto en que salió igual-
mente en algunas cantidades en numerario,
perdidas para el tesoro público, por no ha-
berlas recogido oportunamente de las ad-
ministraciones subalternas.

4º: Por haber dispuesto de tres mil seis-
cientos pesos, invirtiéndolos en efectos de
ropa, y dádolos para su venta á D. Fernan-
do Borboya.

5º: Por haber autorizado á los adminis-
tradores subalternos, y á los expendedores
de papel sellado, para que se aplicaran en
su favor las excedencias que resultaran en
la venta de sellos, hecha por monedas de

doce y medio y de seis y cuarto centavos,
como compensacion de las pérdidas que su-
frieran al verificar la venta por moneda de
cobre, cuyo valor no llegó á diez y á cinco
centavos.

6º y último: por no haber otorgado la
firma que cancelara su buen manejo, ni
exigido á sus subalternos que otorgaran las
suyas.

Estos hechos importan la comision de los
delitos de peculado y concusion y la falta
de cumplimiento en sus deberes.

En 24 de Agosto de 1871, el Juzgado
de Zacatecas resolvió definitivamente esta
causa, dando por compurgado al reo, el deli-
to de peculado con el tiempo que ha sufrido
de prisión y molestias que le ha causado
el proceso; absolviéndolo del juicio por el
cargo de responsabilidad, mandando remi-
tir los libros que llevó D. Sotero de la Tor-
re á la administración principal del papel se-
llado, para que le glozaran sus cuentas é
hicieran la liquidacion correspondiente; pre-
vinéndole, que en caso de que resultara de-
ber alguna cantidad, la pagará á los tres me-
ses después de hecha la liquidacion, impo-
niéndole dos años de reclusion en caso de
no verificarlo; y por último, mandándole de-
volver los bienes que se le han secuestrado,
siempre que dé la fianza de conservarlos á
disposicion de la renta de papel sellado, en-
tragándole los productos de los mismos.

Habiendo sido uno de los motivos de es-
te proceso la entrega que de la Torre ve-
rificó á los sublevados, de la supra dicha
cantidad de diez y ocho mil setecientos cin-
cuenta y tres pesos veinte centavos, como no
se le habia hecho el correspondiente cargo
ni ocupádose el reo de su defensa sobre este
punto, ni promoviéndose resolucion sobre el
mismo; para este objeto y para el de hacer
la averiguacion sobre él en 12 de Abril del
año anterior, se devolvió la causa al Juzga-
do de su origen; el cual habiendo cumplido
con esas prevenciones, en 10 de Octubre
último resolvió ese punto, declarando á de
la Torre inhabil por tal delito para obtener
oficio ó cargo alguno.

De las constancias que aparecen en el proceso, resulta:

Que no se le puede juzgar por el delito de rebelion, por que no está averiguado que haya tomado participio directo en la sublevacion que tuvo lugar en Zacatecas el 8 de Enero de 1870, porque si tomó alguno en la que aconteció el año próximo pasado, de este punto no se ha ocupado, ni podía ocuparse el presente proceso, y por que las leyes de 14 de Octubre de 1870 y 27 de Julio de 1872 concedieron olvido á los perturbadores del orden, cuya gracia le comprende á de la Torre, cualquiera que haya sido la participacion que haya tomado en la perpetracion de esos delitos.

Por la confesion del reo y documentos que aparecen á fojas 10, 11 y 12 del cuaderno 4º, está probado que entregó al titulado Gobernador, puesto por los sublevados, D. Rafael G. Forniza, mil pesos, y D. Juan Torrez Cantabrana, interventor nombrado por los mismos, diez y siete mil setecientos cincuenta y tres pesos veinte centavos en dos fracciones de valores diversos, de cuyos hechos procura excusarse, manifestando que lo hizo cediendo á miedo grave, por el temor de que se cometiese algun atentado sobre su persona.

El corte de caja practicado por el reo y su confesion, prueban ser cierta la falta de seis mil trescientos setenta y un pesos en sellos, de cuya falta procura excusarse diciendo, que acaso procedió de errores padecidos en su contabilidad ó por la sustraccion que alguien haya verificado de mala fé, con la excusiva mira de perjudicarlo, supuesto que ningun interes podía causarle una cantidad de papel que no tenía valor, por haber concluido el bulto en el cual podía usarle.

Por la liquidacion practicada por el Visitador que se nombró para la Administracion de Zacatecas, y por la confesion del

nos que en el año de 1868 se le entregó al crario á cubierto de pér- ya falta se excusa con la impe-

bilidad procura exhoncrarse por su falta de conocimientos sobre el modo de llevar la contabilidad; pues cuando se le encargó de aquella Administracion, dice que no existía la general del ramo, ni tuvo de quien recibir instrucciones sobre el modo de llevar las cuentas; y como no estaba autorizado para pagar altos premios para hacer cambios, no le fué posible concentrar los fondos de las Administraciones subalternas.

Por la confesion del reo y documentos de fojas 128 y 129 del cuaderno principal, aparece probado, que cambió tres mil seiscientos pesos de numerario por efectos de ropa, los cuales dió para su venta á D. Fernando Boiboya, de cuyo hecho pretende disculparse, diciendo que no hizo tal operacion para negociar, procurando en su beneficio algun lucro; sino compelido por la necesidad de concentrar los fondos que habia en las administraciones foráneas, expuestos á perderse por estar amenazada de turbarse la paz pública, como en efecto se alteró á los pocos dias; y que no pretendió venderlos á mayor precio, sino realizarlos prontamente al mismo en que los recibió.

Está igualmente probado tambien por su misma confesion, que autorizó á sus subalternos y expendedores de papel sellado, para que comensaran su trabajo y las perdidas que sufrieran en la venta de sellos de cinco y de diez centavos por monedas de cobre que no llegaran á esos valores con las excepciones que resultaran en las ventas que se hicieran por antiguas monedas llamadas real y medio real; de cuyo hecho se excusa, por la falta de pequeñas monedas, diciéndolas, lo cual lo obligó á dar esa autorizacion para no disminuir las ventas, y en lo que no tuvo ningun interes personal.

Por último: está tambien probado por su misma confesion y diversas diligencias que aparecen en la causa, que no otorgó fianza que caucionara su buen manejo, ni exigió á

ta algunas cantidades de la recaudacion hecha en oficinas foráneas, de cuya responsa-

bien de po didas; de e

sibilidad que hay para conseguir personas que sirvan en la renta del papel sellado, obligándose á caucionar su buen manejo.

Consultando: Que es obligación de todos los empleados que recaudan ó manejan los fondos de la hacienda pública, impedir por cuantos medios les sea posible que se distraigan de su objeto, según lo ordenan varias leyes, y con mas especialidad el artículo 87 de la ley de 17 de Abril de 1837, combatiéndolos con la calificación de usurpadores de los caudales públicos, en todo caso de no llenar debidamente tal obligación.

Que aun mas precisa y severa es la ley de 16 de Diciembre de 1861, en su artículo 15, proponiéndose por objeto, que por ningún motivo se distraiga en usos estráños los productos del papel sellado.

Que anunciándose, como el reo lo confiesa, que la paz pública iba á turbarse, pudo con anticipación poner en salvo los intereses que estaban á su cargo; y no habiéndolo hecho, como no lo hizo, le resulta grave responsabilidad, por la entrega que verificó á los sublevados, de diez y ocho mil setecientos cincuenta y tres pesos veinte centavos.

Que la resistencia que debió presentar para entregar dinero ó valores á los sublevados, no debió limitarse á protestas como lo hizo en el instrumento que se ve á folios 8 y 9 del cuaderno 49, de la manera mas suave y respetuosa, sino á presentar una resistencia pasiva que importara un desobediencia absoluta á las órdenes de los sublevados, que los obligara á violentar la oficina ó sus cajas.

Que por no haber obrado de ese modo, no se exonera de responsabilidad, apesar de las citadas leyes que han concedido amplia amnistía, por que en este punto no se le juzga por el auxilio que con su conducta haya dado á los sublevados; sino por haber quebrantado la fidelidad con que debió haber cuidado de los intereses públicos que estaban á su cargo.

Que siendo obligación de todos los Administradores de la renta del papel sellado,

devolver el sobrante que resulte en cada bienio, para que se inutilice, en la forma que dispone el artículo 43 de la ley de 14 de Febrero de 1866, el Administrador de Zacatecas no pudo legalmente conservar en su poder ninguna cantidad de papel del que correspondió á los años de mil ochocientos sesenta y ocho y sesenta y nueve.

Que no debiendo existir en su poder papel de ese tiempo, debe creerse que los seis mil trescientos setenta y un pesos que le faltaran, no fueron en esa especie, sino en numerario.

Que los Administradores de papel sellado están obligados á dar en dinero los valores que se les remitan en papel, ó á devolver este, si no se hubiere pedido vender.

Que de esta obligación se deduce la de que el reo está obligado á pagar los enunciados seis mil trescientos setenta y un pesos, abonándosele únicamente ciento cuarenta y cinco pesos setenta y cinco centavos, valor de los ciento cinco sellos encontrados en el expendio de D. Fernando Borlaza, según aparece á folios 23 del cuaderno principal.

Que la ignorancia sobre el sistema de contabilidad que se usa en las oficinas de papel sellado, no pudo producir una equivocación de esa cuantía.

Que si la ignorancia ha producido ese error, debe imputarse solo á sí mismo el reo, por haberse prestado á servir un encargo para el que no tenía aptitud.

Que por parte del reo no ha procurado verificar la cuenta, para averiguar si hubo ó no error en ella.

Que no está averiguado, si hay motivo para pensar que ese valor en sellos se haya extrahido con la intención de dañar personalmente á don Fernando.

Que para poner á cubierto al erario, de cualquiera pérdida de cantidades de dinero existentes en las administraciones subalternas, dificultánlese conseguir cambios, pudo y debió haber dispuesto que esas cantidades se depositaran en poder de vecinos

de notorio arraigo, de los lugares donde existía; y no siéndole esto tampoco posible, debía haber hecho uso del medio que le daba la circular de 18 de Febrero de 1854, ocupando para este servicio á los Administradores de correos.

Que la circunstancia de haber autorizado á los empleados de Pinos para que invirtieran en usos estraños los fondos que tenían, la cual agravaría el cargo que sobre este punto se le hizo, no está demostrada; por que los documentos de fojas 32, 33, 34 y 35 del cuaderno segundo, no le fueron dirigidos, ni se habla nada en ellos de fondos pertenecientes á la renta de papel sellado; á la vez que las cartas que de la Torre dirigieron en esos mismos días al empleado de Pinos, y aparecen á fojas 36, 37 y 38 del propio cuaderno, acreditan que fué estraño á la dilapidacion que D. Pablo de la Rosa hizo de tales fondos; y no habiendo mas datos en contra del reo, que el dicho del mismo de la Rosa, no hace prueba por su singularidad y por el interes que tiene en vindicarse, declinando la responsabilidad en contra de de la Torre.

Que el hecho único de que es responsable de la Torre en este punto, es haber admitido letras giradas por de la Rosa y no aceptadas ni pagadas al plazo que ellas indicaban, segun se deduce de las propias cartas.

Que en ningun caso pudo ocupar los fondos pertenecientes á la renta de papel sellado para invertirlos en usos estraños é ilegales, como fué ocupar tres mil seiscientos pesos de efectos de ropa.

Que es de presumirse que con esa operacion se haya propuesto hacer alguna especulacion que le fuera provechosa, por que no consta que esa cantidad existiera en alguna Administracion foránea y que se le hubiera dificultado cambiarla ó conservarla con seguridad; y como el documento de fojas 120 del cuaderno principal, acredita que entre de la Torre y Borboya se celebró en 15 de Mayo de 1868 una especie de com-

TOME VI.—PARTES IX.

pañía mercantil, aunque muy irregular por los términos y condiciones en que se pactó; es tambien por esto que debe creerse, que tal negocio fué hecho para alcanzar algun lucro individual, contraviniendo á la prohibicion que marcan las leyes 7 tít. 15 lib. 12 Nov. R. y 14 tít. 14 Part. 7ª.

Que no habiendo procurado de la Torre asegurar el pago de los tres mil seiscientos pesos que en efectos de ropa dió á Borboya, haciendo que le otorgara alguna caucion ó extendiera algun documento en que constara su obligacion; pues aunque hizo esto último, no fué sino hasta el 1º de Junio de 1870, mucho tiempo despues de haber sido removido del encargo de Administrador principal de la renta de papel sellado; dejó de obrar con la diligencia y fidelidad que deben emplear los que manejan caudales públicos, lo cual hace presumir que esa operacion se hizo entre socios de una compañía mercantil.

Que debe atenderse á que de los tres mil seiscientos pesos se han pagado por los deudores de Borboya, D. Julio M. Márquez, D. Francisco de P. Lopez, D. Nicolás Ríos é Ibarrola y Martinez y Cárdenas, mil doscientos setenta y ocho pesos ochenta y cinco centavos, segun consta á fojas 150, 151, 152, 153 y 154 del cuaderno principal, cuya suma debe abonársele á la cantidad en que ha sido descubierto.

Que siendo notoria la falta de monedas decimales de cinco y diez centavos, y no pudiendo obligar á los compradores á dar mayor suma, por los sellos, de sus valores, hay absoluta necesidad para no disminuir la venta del papel sellado, vender algunos sellos por monedas de cobre de menos valor, y otros por pequeñas monedas de plata de menos precio.

Que habiendose hecho esto, cediendo á tal necesidad, y sin que haya mediado coaccion alguna en los compradores, que estaban en libertad para proporcionarse de cinco y de diez centavos, no puede hacérsele cargo de concucion á de la Torre; tanto menos cuanto que se haya aprovechado de esas diferencias.

Que si bien es cierto que cometió una falta grave en no haber caucionado su buen manejo y por no haber procurado que sus subalternos hicieran lo mismo, esa falta no constituye delito, y solo dá motivo para destituirlo, segun lo previenen diversas leyes y circulares que prohiben que ningun empleado en rentas pueda tomar posesion de su encargo, sin haber antes asegurado su buen manejo.

Que correspondiendo á los Administradores principales nombrar y remover libremente bajo su responsabilidad á los Administradores subalternos, el mal manejo de estos debe imputarse y ser á perjuicio de aquellos, quedándole solo á la hacienda pública una accion civil subsidiaria contra estos y la criminal de peculado.

Que en favor del reo obran las circunstancias atenuantes de su avanzada edad, su buena conducta anterior, los distinguidos servicios, que juntamente con sus hijos ha prestado en defensa de las instituciones é independencia de la República y los suplementos pecuniarios, que de su caudal propio, segun consta á fojas 6 y 7 del cuaderno tercero, en otras ocasiones ha hecho á la renta de papel sellado.

Que estando averiguado, como ya se dijo, que D. Pablo de la Rosa, empleado subalterno de Pinos, dispuso de una cantidad perteneciente á la renta del papel sellado, sin autorizacion ni conocimiento de D. Sotero de la Torre, debe procesársele por el peculado que cometió, dejando salva la accion civil que corresponde á la Torre, para que reclame contra el mismo de la Rosa la cantidad que por este pague.

Que en el cuaderno principal á fojas 96, 97 y 98, aparecen tres recibos en papel simple, firmados, uno por valor de tres mil pesos por D. Ramón C. Ortiz; otro por quinientos por D. Antonio Neri, y otro por trescientos por D. Donato Guerra, los cuales fueron admitidos por D. Sotero de la Torre, el primero, y los otros dos por él mismo, contraviniendo estas cuatro personas

á las disposiciones de la ley de 14 de Febrero de 1856, habiendo incurrido en multa del cinco por ciento sobre el valor de esas cantidades.

En la sustanciacion de este proceso y en la resolucion definitiva, se advierten algunas irregularidades, y son las siguientes:

Haberle corrido traslado al reo, de las diligencias practicadas cuando ya estaba mandado procesar; haberle hecho notificacion antes de concluir el sumario; haber recibido en el cuaderno principal, la fianza del depositario, D. Joaquín Llaguno; haber venido en el mismo, la tercera promovida sobre derecho á una fianza; las diligencias sobre otorgamiento de fianza de D. Sotero de la Torre y aseguramiento de los bienes; haber reunido tambien en el propio cuaderno, las diligencias sobre recaudacion de los productos de los bienes embargados; los ocurso del depositario D. Pedro Morales, manifestando las dificultades que se le presentaban para cobrar las rentas; los pagarés otorgados á Torre y Borboya; las diligencias sobre cobro á los deudores de este, y por último, haberle exigido al defensor, para recibir la causa á prueba, que señalara terminantemente las que se propusiera promover, con lo cual se atacó el libre derecho de defensa, por qué si los jueces pueden calificar la conduccion de las pruebas, no deben negarse á conceder el término en que deben rendirse antes de que se promuevan.

Notase, de que la sentencia lo absuelva de responsabilidad de peculado, y sin embargo, le impone una pena en el caso de que no pague la cantidad que resultase deber, lo que importa no haber resuelto el proceso de un modo claro y definitivo, segun lo ordenan las leyes 2, 3 y 5 tít. 22 Part. 3ª.

Por los fundamentos expuestos, con apoyo además de la ley de 14 de Marzo de 1870 y haciendo uso del arbitrio que concede la ley 8ª tít. 31 part. 7ª, se resuelve:

1º: Se revocan las sentencias de 24 de Agosto de 1871 y 10 de Octubre de 1872.

2º. Por peculado y falta de cumplimiento

en sus deberes para poner á cubierto de toda pérdida los intereses públicos, se condena á D. Sotero de la Torre á tres años de prisión, y se le declara inhábil por seis años para obtener encargos y empleos públicos; cuyos seis años se contarán incluyendo los otros.

3º D. Sotero de la Torre está obligado á pagar á la renta del papel sellado los diez y ocho mil setecientos cincuenta y tres pesos veinte centavos que dió á los sublevados, seis mil doscientos veinticinco pesos treinta y cinco centavos que le faltaron en papel, mil doscientos setenta y ocho pesos ochenta y cinco centavos que faltaron del valor de los efectos de ropa que dió á D. Fernando Borboya, y novecientos noventa y seis pesos cincuenta y cinco y cuarto centavos en que salió descubierto el Administrador subalterno de Pinos, Don Pablo de la Rosa; cuyas cantidades hacen en junto la de veintisiete mil doscientos cuarenta y ocho pesos noventa y cinco un cuarto centavos.

4º: Está también obligado á pagar las cantidades que hayan faltado en las administraciones foráneas y para averiguar cuáles sean estas, la Administración principal de Zacatecas practicará las liquidaciones correspondientes.

5º: Para cumplir lo resuelto en las dos proposiciones anteriores, el Promotor fiscal del Juzgado de Zacatecas promoverá judicialmente, con arreglo á derecho, lo que convenga.

6º: Se revoca el auto que en 20 de Noviembre de 1870 pronunció el Juzgado de Distrito de Zacatecas, declarando que no había mérito para proceder por peculado contra D. Pablo de la Rosa y se le previene al mismo Juzgado proceda por tal delito en contra de esa persona.

7º: Por infracción de la ley de 14 de Febrero de 1856, se multa en un cinco por ciento á D. Ramon O. Ortiz sobre tres mil pesos, á D. Antonio Neri, sobre quinientos y á D. Donato Guerra sobre trescientos, y

como D. Sotero de la Torre admitió en papel común los recibos de esas cantidades, se le multa en el cinco por ciento sobre todas ellas, cuyas multas se distribuirán, según lo dispone el artículo 59 de la enunciada ley.

8º: Conservense en secuestro los bienes embargados á D. Sotero de la Torre, hasta que se hagan ciertas y efectivas las responsabilidades en que ha incurrido.

9º: Se absuelve á D. Sotero de la Torre del cargo que se le hizo por concusión, y se declara que el no haber otorgado fianza, no importa la comisión de un delito.

10º: Remítase copia de la presente sentencia al "Semanario Judicial," Juan Robles Martínez.—Tomás Bravo, secretario.

Es copia: Guadalajara, Febrero 10 de 1873.—Tomás Bravo, secretario.

Pedimento del O. Procurador general de la Nación.

El Procurador general interino dice: que D. Sotero de la Torre, ex-administrador principal de la renta del papel sellado en el Estado de Zacatecas, fué procesado en 17 de Agosto de 1870, por los delitos de peculado, concusión y responsabilidad, por falta de cumplimiento en sus deberes. Practicada la averiguación correspondiente, y asegurados los bienes del reo para poner á salvo los intereses del Erario federal, el Juzgado de Distrito de aquel Estado, hizo consistir el delito de peculado, en que el reo distrajo \$ 3,600 de las administraciones foráneas, invirtiéndolos en efectos de ropa que dió para su venta á D. Fernando Borboya; en el descubierto en que salió, de la cantidad de \$ 3,671 en sellos que le faltaron cuando entregó los intereses públicos que estaban á su cargo, á cuyas cantidades se agregan, \$ 991.54½ cs. que le faltaron al Administrador de Pinos, Pablo de la Rosa.

El delito de concusión lo funda, en la autorización que dió el reo á las administraciones subalternas, para que se aprove-

charán del exceso en que vendían los sellos por la falta de moneda decimal; y por último, hizo consistir la responsabilidad, en la circunstancia de no haber llevado los libros al corriente, ni haber revisado las cuentas de los subalternos, y en no haber otorgado la fianza que caucionara su buen manejo; así como no haber exigido á los subalternos otorgaran las suyas.

Mediante esta clasificacion, el O. Juez referido pronunció su sentencia definitiva, fundada en las siguientes consideraciones: que el expresado de la Torre estaba convicto y confeso en cuanto al delito de peculado, cuyo cargo considera disminuido por las circunstancias atenuantes de que hace mérito; que la confesion que hizo el reo del delito de concucion, no se encuentra admitida por ninguna de las circunstancias del proceso; que el cargo de responsabilidad está destruido por la imposibilidad en que se encontraba de exigir las fianzas de los subalternos, en vista de la necesidad que habia de conservar en los partidos los expendios del papel sellado, y que las diferencias que háy en las cuentas de los mismos subalternos, solo son de la responsabilidad pecuniaria del Administrador principal; por estas consideraciones, y lo prevenido en la Real Cedula de 14 de Mayo de 1807, en el artículo 24 de la Constitucion federal, y ley 8ª tít. 31 part. 7ª, el propio Juez en 24 de Agosto de 1871, declaró compurgado al reo del delito de peculado, lo absolvió del cargo de responsabilidad, mandó remitir los libros que llevó D. Sotero de la Torre, á la Administracion principal del papel sellado para que le glozaran y liquidaran sus cuentas, previniendo entre otras cosas, que en el caso de que resultara debiendo el reo alguna cantidad, la pagará á los tres meses despues de hecha la liquidacion, é imponiéndole dos años de reclusion en caso de no verificarla: que se previniera á sus deudores, enteraran el saldo de sus cuentas en la repetida Administracion; y por fin que continuara el embargo de los bienes; pudiendo

levantarse, siempre que D. Sotero de la Torre diera fianza de tenerlos á disposicion de la renta del papel sellado, entregando sus productos á la misma oficina.

Por no haberse comprendido en la anterior sentencia, el cargo de la entrega que de la Torre hizo á los sublevados, en 8 de Enero de 1870 contra el Supremo Gobierno, de la cantidad de \$ 18,753 20 cs. y que sin embargo, es una de las principales causas por que se le habia proccsado, ni aparecia que tal cargo se le hubiera hecho al reo, ni este se hubiera ocupado de su defensa, se devolvió por el Superior la causa, en 12 de Abril de 1871, para que se hiciera la averiguacion correspondiente, hasta pronunciar la respectiva sentencia, la que fué pronunciada en 10 de Octubre del mismo año, clasificando el delito de prevaricato, y declarando á de la Torre, con fundamento del artículo 1º y 2º capítulo 2 de la ley de 24 de Marzo de 1813, inhábil para obtener oficio ó cargo alguno.

Sustanciada la apelacion, que de lo sentenciado por el inferior interpusieron D. Sotero de la Torre y su defensor, el Tribunal de Circuito de Guadalajara, despues de hacer la exacta clasificacion de los delitos, con fundamento de la ley de 14 de Marzo de 1807, y haciendo uso del arbitrio judicial que concede la ley 8ª tít. 31 part. 7ª, revocó dichas sentencias, condenando al reo por peculado y falta de cumplimiento en sus deberes, para poner á cubierto de toda pérdida los intereses públicos, á tres años de prision, y declarándolo inhábil por seis años, para obtener encargos, ó empleos públicos; cuyos seis años se contarán desde que comiencen los tres de prision, declarando, que D. Sotero de la Torre está obligado á pagar á la renta del papel sellado, los \$ 18,753 20 cs. que dió á los sublevados, los \$ 6,225 35 cs. que le faltaron en papel, los \$ 1,278 85 cs. que faltaron del valor de los efectos de ropa, que dió á D. Fernando Borbolla; y finalmente, los \$ 991 54½ cs. en que salió descubierto el Administrador su-

balterno de Pinos D. Pablo de la Rosa, cuyas cantidades hacen en conjunto, la de \$ 27,248 45½ cs.

Igualmente declaró: que D. Sotero de la Torre, está obligado á pagar las cantidades que hayan faltado en las Administraciones foráneas, para lo que, la Administracion principal de Zacatecas, practicará la liquidacion correspondiente, y el Promotor fiscal del Juzgado del mismo Estado, promoverá judicialmente con arreglo á derecho lo que convenga, mandando conservar en secuestro los bienes embargados á D. Sotero de la Torre, hasta que se hagan ciertas y efectivas las responsabilidades en que ha incurrido, y absolviéndolo del cargo de concucion y declarando, que el no haber otorgado fianza, no importa un delito.

Y como en concepto del mismo Juez de Circuito, se infringió la ley de 14 de Febrero de 1856, y ademas se han cometido otras muchas irregularidades de que se hace cargo, revocó el auto de 20 de Noviembre de 1870, que pronunció el Juzgado de Distrito de Zacatecas, en que declaraba, que no habia mérito para proceder por peculado contra D. Pablo de la Rosa; previniendo al mismo Juzgado, procediera por tal delito contra el mencionado de la Rosa; multó en un cinco por ciento á D. Ramon C. Ortiz sobre \$ 3000, á D. Antonio Neri sobre 500 y á D. Donato Guerra sobre 200; y á D. Sotero de la Torre, por haber recibido en papel comun los recibos de esas cantidades, lo multó igualmente en el cinco por ciento sobre todas ellas; cuyas multas se deberán distribuir segun lo dispone el artículo 59 de la mencionada ley; y por último, mandó que se hicieran notar al Juez de Distrito, las irregularidades en que incurrió en la formacion del proceso, recomendándole las evite en lo sucesivo, y previniendo á la vez, que para no perjudicar la reputacion del mismo, se omitiera esta proposicion, y la parte expositiva, en la copia que se remitiera al Semanario Judicial.

A juicio del que suscribe, el fallo de 23

instancia es estrechamente justo, y muy legalés y atendibles los fundamentos en que se apoya, pues en todo el proceso, si bien se encuentran circunstancias que atenuan el cargo de peculado, ninguna hay que lo destruya, pues no es de tomarse en consideracion la prueba testimonial rendida por el defensor del reo, con objeto de destruir el cargo en cuanto á la falta de los sellos que no entregó D. Sotero de la Torre, por que segun la circular de 25 de Setiembre de 1869, al fin de cada año debe hacerse un recuento de las existencias que tenga cada una de las administraciones del papel sellado, firmándose la respectiva factura de recuento, autorizada por las personas que para dicho acto manda intervenir; y en el caso presente, no se há presentado dicha factura; por lo mismo, la prueba testimonial rendida, no es de ningun efecto, porque cuando la ley, en los casos como el presente, determina el modo de probar un acto cualquiera, solo es admisible, y hace prueba plena en ellos el testimonio que ella prescribe.

La responsabilidad que resulta á D. Sotero de la Torre, por la entrega del dinero que dió á los sublevados, no puede considerarse destruida, en virtud de la protesta cuyo testimonio obra en la causa, porque dicha protesta prueba por el contrario, que D. Sotero de la Torre no cuidó de tener la diligencia exactísima que todos los empleados de hacienda están obligados á prestar en la guarda y administracion de los caudales públicos; porque esta diligencia no cede, sino solamente á la fuerza, cuando no puede evitarse, y esta fuerza no hubo en el presente caso.

Por último, es fuera de toda duda, que los Administradores principales son inmediatamente responsables de las cantidades que faltan á sus subalternos; así es que resultando probado, que al Administrador subalterno de Pinos faltó la cantidad de \$ 991.54½ cs., debe esta cantidad ser pagada por el procesado, debiendo procesarse á su vez á dicho subalterno, é igualmente,

y por la razon anterior, debe satisfacer D. Sotero de la Torre, las demas cantidades que hayan faltado en las demas Administraciones subalternas.

Por estos motivos, y los que aduce el Tribunal de Circuito en su sentencia de 31 de Enero de 1873, el Procurador general pide, se confirme en todas sus partes, el fallo mencionado.

México, 29 de Abril de 1874.—*García Ramírez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 5 de Agosto de 1874.—Vista la causa instruida en el Juzgado de Distrito del Estado de Zacatecas contra D. Sotero de la Torre, por peculado y responsabilidad, como Administrador de la renta del papel sellado en el Estado referido: Vista la sentencia de 1ª instancia pronunciada en 24 de Agosto 1871, por la que se declaró:

Primero: que se dá por compurgado á D. Sotero de la Torre, con el tiempo de prision sufrida y molestias del proceso, por el delito de peculado, no imponiéndole la pena de privacion del empleo, por éstar destituido legalmente de él con anterioridad.

Segundo: que se absuelve del juicio al mismo de la Torre, por el cargo de responsabilidad.

Tercero: que se remitan los libros y documentos á la Administracion de la renta del papel sellado, para que se forme una liquidacion definitiva, señalándole tres meses despues de concluida, al Sr. de la Torre, para que haga el pago, y si no lo hiciera en todo ó en parte, se le imponen dos años de reclusion, contados desde el día de su aprehension.

Cuarto: remítase á la expresada Administracion, el papel sellado presentado por el Sr. de la Torre, para que se le abone su valor.

Quinto: consérvense en depósito los bienes secuestrados, pudiendo levantarse siempre

que el Sr. de la Torre dé fianza competente, de que los tendrá á disposicion de la renta del papel sellado, y de que entregará mensualmente los productos líquidos que le corresponden, por sus derechos personales, para evitar de esta manera el recargo de los honorarios del depositario.

Sesto: tómese razon en extracto, de los estados generales y de los particulares, de la Administracion de Pinos, y devuélvanse á la Administracion principal de la renta del papel sellado.

Sétimo: prevénganse á los deudores de D. Sotero de la Torre, enteren en la Administracion principal de la renta del papel sellado de esta Ciudad, el saldo de sus cuentas, dentro del término de diez dias, contados desde la fecha de la notificacion; librándose los correspondientes exhortos por los que están ausentes, y apercibiéndose á todos, de que si no cumpliesen, les pasará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho, abonándose al Sr. de la Torre, por dicha oficina, las cantidades que se entreguen. Vista la segunda sentencia, que el mismo Juzgado pronunció en 10 de Octubre de 1872, en virtud de un auto del Tribunal de Circuito de Guadalajara, por lo que declaró el Juzgado:

Primero: que se condena á D. Sotero de la Torre, por el cargo que se le ha hecho, á la inhabilidad para obtener oficio ni cargo alguno, no privándosele del empleo, por haber sido destituido.

Segundo: póngase en libertad bajo de seguras fianzas á D. Sotero de la Torre, chancelándose la que con anterioridad se habia otorgado á su favor, remitiéndose en revision la causa al Superior.

Tercero: prevéngase al expresado Torre, nombre persona que lo defienda en la 2ª instancia. Vista la sentencia pronunciada en 2ª instancia en 31 de Enero del año próximo pasado, por el Tribunal de Circuito de Guadalajara, por la que se resolvió.

Primero: se revocan las sentencias de 24 de Agosto de 1871 y 10 de Octubre de 1872.

Segundo: por peculado y falta de cum-

plimiento en sus deberes, para poner á cubierto de toda pérdida los intereses públicos, se condena á D. Sotero de la Torre, á tres años de prisión, y se le declara inhabil por seis años, para obtener encargos y empleos públicos, cuyos seis años se contarán incluyendo los otros.

Tercero: D. Sotero de la Torre está obligado á pagar á la renta del papel sellado, los diez y ocho mil setecientos cincuenta y tres pesos veinte centavos, seis mil doscientos veinticinco pesos treinta y cinco centavos que le faltaron de papel, mil doscientos setenta y ocho pesos ochenta y cinco centavos, que le faltaron del valor de los efectos de ropa, que dió á D. Fernando Borbolla, y novecientos noventa y un pesos cincuenta y cinco un cuarto centavos, en que salió descubierto el Administrador subalterno de Pinos, D. Pablo de la Rosa, cuyas cantidades hacen en junto, la de veintisiete mil doscientos cuarenta y ocho pesos noventa y cinco un cuarto centavos.

Cuarto: está también obligado á pagar las cantidades que hayan faltado en las administraciones foráneas, y para averiguarse cuales sean estas, la Administración principal de Zacatecas, practicará las liquidaciones correspondientes.

Quinto: para cumplir lo resuelto en las dos proposiciones anteriores, el Promotor fiscal del Juzgado de Distrito de Zacatecas, promoverá judicialmente con arreglo á derecho lo que convenga.

Sexto: se revoca el auto que en 20 de Noviembre de 1870, pronunció el Juzgado de Distrito de Zacatecas, declarando, que no había méritos para proceder por peculado contra D. Pablo de la Rosa, y se previene al mismo Juzgado, proceda por tal delito en contra de esa persona.

Sétimo: por infracción de la ley de 14 de Febrero de 1856, se multa en un cinco por ciento á D. Ramon C. Ortiz sobre tres mil pesos, á D. Antonio Neri sobre quinientos pesos, y á D. Donato Guerra sobre trescientos; y como D. Sotero de la Torre

admitió en papel comun los recibos de esas cantidades, se le multa en el cinco por ciento sobre todas ellas, cuyas multas se distribuirán, según lo dispuesto en el artículo 59 de la mencionada ley.

Octavo: consérvense en secuestro los bienes embargados á D. Sotero de la Torre, hasta que se hagan ciertas y efectivas las responsabilidades en que ha incurrido.

Noveno: lo acordado.

Décimo: se absuelve á D. Sotero de la Torre, del cargo que se le hizo por concusión, y se declara: que el no haber otorgado fianza, no importa la comisión de un delito. Visto el pedimento del C. Procurador general; lo alegado por el encausado en su defensa al tiempo de la vista; la citación para sentencia y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, se declara:

Primero: es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Guadalajara.

Segundo: que respecto de las cantidades entregadas á las fuerzas pronunciadas en Zacatecas, el mes de Enero de 1870, se declara á D. Sotero de la Torre, comprendido en la amnistía de 27 de Julio de 1872, que fué general y amplísima.

Tercero: que en lo concerniente á las responsabilidades anteriores que puedan resultar al mismo de la Torre, en el ejercicio de sus funciones como Administrador principal del papel sellado, en el Estado de Zacatecas, queda expedito el derecho del Fisco para dilucidarlas con arreglo á las leyes.

Cuarto: devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos legales.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que forman la 1.^a Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Enrique Landa*, secretario.